

dente Daniel Ortega, no tenemos miedo”.

La fundación de esta organización se ha realizado en un período en que el número de los ataques contra representantes de organizaciones de defensa de derechos humanos y feministas ha aumentado. El 17 de octubre de 2008, por ejemplo, Vilma Núñez, la acreditada presidente durante muchos años del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), fue atacada al salir del Ministerio de Asuntos Públicos con algunos colaboradores y periodistas. Los agresores formaban parte de los Consejos de Poder Ciudadano y los policías que estaban presentes no intervinieron. En ese mismo mes, inmediatamente antes de las elecciones municipales, se observó además una ola de registros violentos de los oficios pertenecientes sobretudo al centro de documentación CINCO y al Movimiento Autónomo de Mujeres. Para el público crítico, tales registros, que las autoridades justificaron como controles a las organizaciones que habrían efectuado transacciones financieras deshonestas, representan otro intento de intimidación.

En este contexto, la fundación de nuevas organizaciones más o menos feministas destinadas a competir con las ya existentes parece una continuación, sino una agudización, de las estrategias represivas. Evidentemente, la cuestión de género se ha convertido en uno de los blancos principales de la administración de Ortega. El foco de su crítica está dirigido, ante todo, a las feministas organizadas que lucharon vehementemente contra la prohibición general del aborto, ley que fuera promulgada poco antes de las elecciones presidenciales en 2006. Las declaraciones del presidente insultando a las feministas como abortistas, y la reciente inauguración presidencial de la plaza a la Biblia en Managua, se corresponden además con ciertas tendencias regionales. Según infor-

maba Radio Vaticano en septiembre de 2008: “Fuera de la lucha contra la pobreza hay otro tema que une a los obispos latinoamericanos: el esfuerzo para detener la legalización del aborto en el continente latinoamericano”.

*Anika Oettler es socióloga e investigadora del GIGA German Institute of Global and Area Studies en Hamburgo, Alemania. Correo electrónico: oettler@giga-hamburg.de.*

**Peter Peetz**

## **¿De hacendado a revolucionario? Mel Zelaya y el giro hacia la izquierda del gobierno hondureño**

El 25 de agosto de 2008, el presidente de Honduras, Manuel “Mel” Zelaya, firmó para su país el convenio de adhesión a la iniciativa de integración regional propagada por Hugo Chávez, conocido bajo el nombre de ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). La decisión del gobierno hondureño quedó confirmada el 9 de octubre mediante la ratificación del convenio internacional por el Congreso Nacional. Después de dos años y medio de política exterior ambivalente —entre, por ejemplo, la instalación de una nueva base militar con el apoyo de los EE. UU. para combatir el narcotráfico (a mediados de 2006) y, por otro lado, la adhesión al esquema de venta de combustible de Venezuela, Petrocaribe (ratificado por el Congreso nacional en marzo de 2008)— parece que Zelaya terminó optando por el lado izquierdo, pro Chávez y por lo tanto anti EEUU, en su manejo de las

relaciones internacionales de Honduras. Otros indicios de un posible giro hacia la izquierda o, mejor dicho, hacia un populismo al estilo venezolano, se pueden encontrar en las políticas domésticas de Zelaya: como consecuencia de una permanente confrontación con los medios de comunicación (privados) creó su propio periódico, el semanal *Poder Ciudadano* y, mediante una maniobra jurídica muy controvertida, nacionalizó una frecuencia de televisión, instalando un canal público (Canal 8). Desde el principio de su mandato ha participado personalmente en numerosas “Asambleas del Poder Ciudadano”, una especie de cabildos abiertos en todo el país, a los que acuden, según sus críticos, sobre todo sus adeptos políticos. A nivel retórico, Zelaya arremete constantemente contra los “grupos de poder fáctico”, o sea, contra la élite tradicional y las influencias que ésta ejerce mediante el clientelismo y la corrupción. Por ejemplo, en su discurso con ocasión del aniversario de la independencia centroamericana, el 15 de septiembre de 2008, dijo: “Grupos de poder fáctico, oligarquías criollas, corruptas, los responsables de la pobreza y del atraso de casi dos siglos y propulsores de un sistema económico injusto [...] se han apropiado [...] de todos los servicios públicos de energía, de telecomunicaciones y del sistema financiero nacional, de los medios de producción y de medios de comunicación” (*La Tribuna*, 16/12/2008).

¿Son las políticas de Mel Zelaya comparables con las de Chávez, Ortega y Morales? ¿Está el presidente de Honduras intentando seriamente implementar políticas que corresponden a alguna corriente ideológica de izquierda? Para un análisis que vaya más allá del nivel superficial de la retórica política y de los hechos placativos es preciso interpretar las políticas supuestamente izquierdistas de Zelaya

considerando tanto la cultura política como la actual coyuntura política en Honduras. Además, las decisiones mencionadas tienen que ser contextualizadas en el marco del desempeño del gobierno hondureño en otras áreas políticas importantes; sólo así se puede estimar el peso relativo de las referidas acciones.

### La “democracia” hondureña

Formalmente, el sistema político hondureño consiste en una democracia representativa con separación de poderes. Tanto el presidente como el parlamento unicameral se eligen mediante elecciones generales desde el final del último régimen militar en 1982. Desde entonces, la vida política ha estado dominada por dos partidos grandes que se han alternado en el poder: el Partido Liberal (PL) actualmente en el gobierno y el Partido Nacional (PN) que estuvo al mando, por última vez, entre 2002 y enero de 2006 con la presidencia de Ricardo Maduro. Aparte de los dos partidos dominantes existen tres partidos pequeños, eufemísticamente llamados “partidos emergentes”, que suelen obtener entre el uno y el cinco por ciento cada uno en las elecciones: la Democracia Cristiana (DC), el Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD) y la Unificación Democrática (UD). A diferencia de Nicaragua y El Salvador, en Honduras el sistema bipartidista no implica ninguna polarización ideológica de la política y de la sociedad. El PL y el PN carecen de claros perfiles ideológicos y programáticos y se diferencian casi exclusivamente por los respectivos líderes que los están dirigiendo en un determinado momento histórico.

Desde la instauración del actual sistema democrático, los dos partidos tradicionales (y muchas veces también los “emer-

gentes”) han tendido a la búsqueda de consensos y mantenido una cierta superficialidad en la competencia entre las opciones políticas. Más que organizaciones para la agregación de intereses de la población y para la formulación de las alternativas políticas, el PL y el PN son una especie de máquinas de regulación de conflictos entre las facciones de la élite socio-económica: muchas de las familias económicamente más poderosas del país dirigen una corriente interna en uno u otro. Es indicativo que en la terminología política hondureña a los líderes de esas facciones se les llama “dueños de las corrientes”. Esas corrientes, lejos de ser comparables con las alas ideológicas de los partidos en democracias avanzadas, son fácticamente la institucionalización política de las redes clientelistas lideradas por las familias oligarcas. Los dos partidos sirven, en primer lugar, para organizar la competencia y la colaboración entre estas redes clientelistas. En elecciones primarias –las últimas se celebraron el 30 de noviembre de 2008– se define cuál de las corrientes queda encargada de competir en nombre del partido para cada cargo de elección popular: la presidencia, los 128 escaños del Congreso nacional y las alcaldías. En el caso de ganar el respectivo cargo, el apoyo de las otras corrientes recibido en la campaña se recompensa, por lo general, mediante la repartición de puestos en la administración pública (desde el ministro hasta el personal de limpieza de los edificios públicos...), mediante la contratación de empresas ligadas a las respectivas redes, etc. Entre las familias oligarcas existen múltiples relaciones económicas y personales que se traducen, entre otros, en inversiones en empresas conjuntas o matrimonios que trascienden las afiliaciones partidarias. Para dar sólo un ejemplo: un hermano de Miguel Pastor, ex alcalde capitalino y “dueño” de una

corriente del PN, está casado con una hija de Rafael Ferrari, oligarca del PL. Estos lazos “interoligárquicos” generan la mencionada tendencia a la negociación de consensos, impidiendo que los conflictos políticos entre los partidos se vuelvan realmente profundos y serios y, al mismo tiempo, incluyendo cierta tolerancia de los líderes políticos y sus aliados en el sistema judicial frente a actos de corrupción perpetrados por los supuestos adversarios políticos.

Visto ante este trasfondo de la cultura política y considerando el hecho de que Mel Zelaya, hijo de una familia de terratenientes del departamento Olancho, siempre ha sido parte de ese juego político, su retórica a favor del ALBA y en contra de “los poderes fácticos” pierde bastante credibilidad. De manera mucho más obvia que su antecesor, Ricardo Maduro, Zelaya repartió los cargos de su gobierno entre las facciones de su partido. Sobre todo en su primer gabinete muchos apellidos eran bien conocidos. Algunos de los ministros eran hijos, hermanos u otros parientes de los diferentes oligarcas liberales; por ejemplo Yani Rosenthal (hijo del banquero, magnate industrial y dueño de un conglomerado de medios de comunicación, Jaime Rosenthal), Lizzy Azcona (hija del ex presidente José Azcona) y Jorge Arturo Reina (hermano del ex presidente Carlos Alberto Reina y, desde que éste falleció en 2003, “heredero” de la corriente reinista en el PL).

Por diferentes razones, con el tiempo, la relación del presidente con algunos de las corrientes internas de su partido se fue deteriorando. Principalmente, en vista a las elecciones primarias de 2008, se produjo un fuerte conflicto con el ala liderada por el presidente del Parlamento, Roberto Micheletti. La mayoría de los diputados del PL en el Congreso nacional forman parte de su corriente y en varias ocasio-

nes, en abierta oposición contra Zelaya, rechazaron propuestas del ejecutivo: se negaron a aprobar una ley para reducir el tráfico vehicular en zonas urbanas (“Hoy no circula”) y tampoco avalaron los planes del presidente de cerrar definitivamente el aeropuerto de Tegucigalpa-Toncontín, cuyas deficiencias de seguridad se evidenciaron una vez más en mayo de 2008 cuando un accidente causó la muerte de cinco personas. Después de que el jefe de Estado firmara el convenio del ALBA, Micheletti anunció públicamente su intención de usar su influencia en la bancada del PL para no ratificar el tratado. Poco después trascendieron noticias sobre negociaciones a puerta cerrada entre los dos líderes liberales. El parlamento acabó ratificando el ALBA con los votos de la bancada completa del PL y de los tres partidos pequeños. (La bancada nacionalista, como era de esperar en este sistema de partidos “de baja conflictividad”, se abstuvo de votar, de manera que el convenio se ratificó sin votos en contra.) Zelaya, por su parte, parece haberse comprometido, como parte del trueque, a apoyar a Micheletti como precandidato presidencial. La anécdota de la ratificación del ALBA ejemplifica cómo una decisión, que supuestamente es altamente ideológica, en Honduras se rige por las circunstancias de la coyuntura política y por los intereses personales de algunos oligarcas bipartidistas.

### **La retórica y las políticas de Zelaya**

Tanto la retórica de Zelaya en contra de los “grupos de poder” como las decisiones emblemáticas como la firma del ALBA, además, contrastan con políticas nada anti-oligárquicas en muchas otras áreas. En octubre de 2008, por ejemplo, el Estado hondureño contrató la generación

de 205 megavatios de “energía sucia” (energía eléctrica producida con carbón mineral) favoreciendo de esa manera a dos empresas guatemaltecas en manos de un conocido político del vecino país, Leonel López Rodas (Partido de Avanzada Nacional, PAN). Es decir, el gobierno contrató precisamente empresas cuyo dueño forma parte de los “grupos de poder”, en este caso, guatemaltecos (o centroamericanos), y que, además, contribuyen a la degradación del medio ambiente. Otro ejemplo, también con implicaciones para la naturaleza, es la sustitución de la agencia administradora de los bosques del país, AFE-COHDEFOR (Administración Forestal del Estado-Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal) por el nuevo ICF (Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre). AFE-COHDEFOR era considerada una de las instituciones más corruptas del Estado por un sinnúmero de irregularidades que se produjeron en ella durante las décadas de su existencia, sobre todo en relación a la emisión de permisos para la tala de madera, uno de los negocios más rentables para la élite económica del país. Después de más de ocho años de debate y con asesoría de organismos de la cooperación externa (entre otros de la GTZ, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, de Alemania), a principios de 2008 el Congreso Nacional finalmente aprobó una nueva ley forestal (Ley Forestal de Áreas Protegidas y de Vida Silvestre). Entre otras cosas, la ley instala el nuevo instituto precisamente con el afán de acabar con las estructuras informales establecidas en AFE-COHDEFOR que propiciaban la corrupción y de crear la oportunidad para un nuevo comienzo tanto en cuanto al personal como a la cultura institucional del organismo. Debido a la resistencia fuerte de la sociedad civil organizada,

Zelaya no logró imponer como director del ICF al entonces subgerente de AFE-COHDEFOR, Santos Cruz, lo que hubiera sido un continuismo demasiado obvio. En cambio, acabó nombrando a otra persona (Suyapa Otero) y poniendo a Santos Cruz como subdirector. Periodistas críticos y fuentes cercanas a la sociedad civil organizada aseguran que en el nuevo instituto siguen dándose prácticas muy poco transparentes, favoreciendo, al igual que en AFE-COHDEFOR, a las élites socioeconómicas y perjudicando tanto a la población pobre en las áreas forestales como a la naturaleza. Si la retórica antioligárquica del presidente Zelaya se basara en una convicción seria, no debería permitir éste ni tantos otros continuismos en Honduras.

¿Por qué ha optado el hacendado olanchano Mel Zelaya por una retórica tan parecida a la de Hugo Chávez? Hay que tener en cuenta que con el comienzo de las campañas para las elecciones primarias de noviembre de 2008 el mandato presidencial de Zelaya entró en su fase terminal. Es decir, entró en una fase en la que tanto la atención pública como la de los actores políticos deja de fijarse en las políticas del gobierno actual y se traslada cada día más hacia el juego político relacionado con las elecciones y las posibles constelaciones pos-electorales. Algunos adversarios de Zelaya sospechan que, con la mencionada retórica y la decisión por el ALBA, el presidente intentó preparar las condiciones en la opinión pública para una ruptura con el orden constitucional vigente y para su permanencia en la presidencia más allá de su actual mandato. Esta sospecha es exagerada ya que parece muy poco probable que Zelaya, con su profundo arraigo en las estructuras tradicionales de la “democracia de consenso oligárquico”, retara de esa forma a los otros poderes de Estado, a la comunidad

de cooperantes y, principalmente, a las fuerzas armadas. Estas últimas se definen hoy, por lo menos en su discurso oficial, como defensoras del sistema constitucional y, después de que surgieran los rumores sobre la supuesta intención de Zelaya de no entregar su cargo al final del periodo previsto, altos rangos de las fuerzas armadas se apresuraron a pronunciarse en ese sentido garantista. Sin embargo, lo que se podría percibir como un giro hacia la izquierda del presidente hondureño sí parece obedecer a una lógica populista. Encarando su futuro político postelectoral, Zelaya está preparando el terreno para seguir participando en el juego político de las corrientes clientelistas del bipartidismo. Su retórica antioligárquica y las aisladas decisiones de toque antiimperialista le pueden servir para ampliar su base popular, lo que a su vez le ayudará a asegurarse en el futuro sus cuotas de poder en el sistema político y socio-económico del país. La otra temática apta para cualquier tipo de populismo, la de la seguridad ciudadana, ya está “ocupada” con cierta credibilidad por el Partido Nacional, sobre todo por la corriente de Porfirio “Pepe” Lobo, quien ganó con más de un setenta por ciento las elecciones primarias en el lado nacionalista. Lobo propone nombrar como ministro de seguridad nuevamente a Óscar Álvarez, personaje emblemático por sus políticas de “cero tolerancia” para con la delincuencia durante el gobierno de Ricardo Maduro. Por eso, Zelaya tuvo que buscar otro tema de fácil explotación populista y, dado el momento histórico (establecimiento de un eje Chávez-Morales-Correa-Ortega en las relaciones internacionales, el obvio fracaso de las políticas neoliberales en Honduras y Latinoamérica, etc.), encontró la oportunidad en una retórica de revolución social inspirada en el bolivarianismo de Hugo Chávez.

## Zelaya y las relaciones internacionales

Queda por discutir qué importancia real tienen las escapadas populistas de Mel Zelaya para el desarrollo y las relaciones internacionales de Honduras. Probablemente, las consecuencias concretas serán mínimas. Primero porque la coyuntura política ya ha pasado por alto ese episodio. En las elecciones primarias quedaron como candidatos para los comicios generales de 2009 Pepe Lobo para el PN y Elvin Santos para el PL. (Oficialmente el candidato que ganó por el “Movimiento Elvincista” es Mauricio Villeda porque la Corte Suprema inhabilitó a Santos para las elecciones por considerar que, según la constitución, su cargo anterior –vicepresidente de la República– le impide postularse como candidato presidencial.) Los dos contrincantes se han pronunciado en contra de las ideas últimamente propagadas por Zelaya, es decir, a más tardar después de la inauguración del nuevo gobierno en enero de 2010, sea cual sea el resultado de las elecciones, se discontinuarán las políticas del populismo izquierdista que ostentó implementar el actual presidente.

Además, la relevancia de los proyectos promovidos por el jefe de Estado, sobre todo la adhesión al ALBA, es más que cuestionable: los cien tractores que el gobierno de Venezuela se comprometió a regalar al campesinado hondureño lamentablemente no van a terminar con la pobreza en Honduras, ni tampoco los treinta millones de dólares que Venezuela le dio a Honduras en forma de préstamo. Y en una época de precios bajos de petróleo es poco probable que Venezuela aumente significativamente sus ayudas, y aunque lo hiciera sería dudable si el asistencialismo venezolano tendría efectos profundos y sostenibles. La poca importancia que tiene la firma del tratado del ALBA a nivel internacional ya se evidenció: el gobierno de

George W. Bush se mostró poco impresionado por ese acto “antiimperialista” y prolongó, contra lo que temían los críticos de Zelaya, el TPS (Temporary Protection Status) para los 70.000 inmigrantes hondureños que por esa modalidad viven y trabajan legalmente en EE. UU. desde que el huracán *Mitch* devastó a Honduras. Eso sí, y he aquí tal vez uno de los pocos efectos negativos que las mencionadas políticas de Zelaya han tenido a corto plazo, a los inmigrantes provenientes del país vecino, El Salvador, con su gobierno neoliberal y derechista, EE. UU. les han convertido el TPS en un permiso de residencia indefinido mientras que a la “rebelde” Honduras sólo se le prolongó el arreglo por 18 meses (con la opción a otra prolongación limitada o ilimitada en el futuro).

Las políticas con tinte de populismo chavista implementadas por Mel Zelaya son poco relevantes para Honduras. Su discurso en contra de los llamados “grupos de poder” carece fundamentalmente de credibilidad porque el mismo Zelaya siempre formó y sigue formando parte de estos grupos, como muchas de sus políticas lo evidencian. La credibilidad del gobierno hondureño está puesta en duda también porque analistas nacionales y gran parte de la población consideran a la administración actual como una de las más corruptas desde que se instaló el sistema político vigente. Muchos hondureños comparan la falta de transparencia y los consecuentes niveles de corrupción de hoy con la época del ex presidente Rafael Callejas, figura emblemática y casi sinónima de las formas más descaradas de enriquecimiento ilícito a costa del pueblo hondureño.

*Peter Peetz, M. A., es politólogo e investigador del GIGA German Institute of Global and Area Studies en Hamburgo, Alemania. Correo electrónico: peetz@giga-hamburg.de.*